

COYUNTURA 1990

EL PROYECTO DE CALLEJAS



INTRODUCCION

El documento que hoy publicamos bajo el título general de **EL PROYECTO DE CALLEJAS**, es un documentado análisis de la coyuntura política, económica y social que vivió Honduras durante el año 1990. Ha sido elaborado por los miembros del Equipo de Reflexión de la Vicaría Episcopal (Iglesia Católica) del Departamento de Yoro, en el norte del país.

El estudio de los principales acontecimientos acaecidos en 1990, su ubicación en el marco de un proyecto claro y definido impulsado por el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, y el análisis de las primeras consecuencias económicas y sociales que han afectado a la población, son tareas fundamentales que debemos realizar si queremos entender mejor qué es lo que está pasando actualmente en Honduras. Pero, sobre todo, son tareas de impostergable solución para prevenir lo que pudiera suceder en el inmediato futuro.

Se siente, se percibe en el ambiente que estamos viviendo un lento pero seguro proceso de acumulación de tensiones sociales. Al dar seguimiento minucioso a los problemas sociales, podemos comprobar con facilidad la espiral ascendente de los conflictos y la forma en que los niveles de conflictividad en el campo y en la ciudad van subiendo inexorablemente. Al estudiar lo que aconteció en 1990 y al analizar los principales problemas de su coyuntura, podremos entender mejor lo que está pasando en 1991.

Por todo ello, el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) ha decidido publicar este valioso documento en su colección de Boletines Especiales. Al ponerlo en manos de nuestros lectores, estamos seguros que ayudaremos a entender mejor la realidad económica y social de Honduras así como las perspectivas políticas de su sociedad.

COYUNTURA 1990

EL PROYECTO DE CALLEJAS

Si el año pasado finalizaba con las grandes expectativas creadas por Callejas debido a su triunfo electoral, 1990 termina con un gran desencanto en la mayoría de la población. Pero a pesar de esto y por paradójico que pueda parecer, el "Proyecto Callejista" es el único sobre el escenario político. Ninguna otra fuerza política ha sido capaz de hacerle frente y, mucho menos, ofrecer una alternativa. Esto viene reforzado por hechos, uno de carácter externo como es la nueva derechización y homogeneización del área después de la derrota del Frente Sandinista y, otra, de carácter interno, como es la incapacidad del movimiento popular para unificarse y presentar una alternativa.

Según Callejas, termina el año habiendo concluido con éxito la primera parte del "Programa de Ajuste Estructural"; esta opinión la comparten también los organismos financieros internacionales. Pero este cacareado éxito gubernamental no puede ocultar la pérdida de censo y credibilidad por parte de sectores crecientes de la sociedad debido a lo severo del ajuste económico. Igualmente que finaliza el año en medio de una serie de contradicciones: unas Fuerzas Armadas atravesadas por una crónica crisis de poder, una pseudo-amnistía que no ha beneficiado a nadie, una escalada terrorista fantasma y, por último, el escándalo de los diputados, quienes instrumentalizando el Congreso Nacional para sus fines personales, hacen recaer sobre el pueblo el peso de una crisis que a ellos no les afecta para nada.

Callejas ha corrido en solitario puesto, que las fuerzas políticas han desaparecido casi por completo. Los partidos emergentes aún no se reponen de las divisiones internas y la poca ascendencia que tienen sobre la población. El Partido de Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD), que se había alzado con un caudal político mayor en las últimas elecciones, vuelve a fragmentarse en sus componentes iniciales perdiendo fuerza con ello en la presente coyuntura. El Partido Liberal que dejó el poder sumamente dividido y atomizado, no ha sabido hacer oposiciones y ni siquiera capitalizar políticamente el descontento nacional ocasionado por el programa económico callejista. El movimiento popular sigue dividido, débil y batallando con futuros proyectos de unidad, pero son la capacidad de elaborar un proyecto alternativo. Como reverso de todo esto constatamos la gran habilidad de Callejas para manejar y manejarse en esta situación.

I. EL PROYECTO DE CALLEJAS

1.1. Los comienzos

Cuando Callejas asume el poder, e inclusive desde que se conoció el resultado de las elecciones en noviembre de 1989, daba la impresión que los dos ejes dominantes del nuevo gobierno serían la "Concertación Nacional" y la "Reforma Económica". Pero, con el transcurrir del tiempo se fue decantando como

el eje dominante: la Reforma Económica y eso a pesar de que en los primeros meses el tema recurrente fue la Concertación Nacional, tal como se destacó en el discurso de la toma de posesión. Al final, la Concertación perdió relevancia pues no había sobre qué concertar y, además, se la utilizó como un instrumento de mediatización de los diferentes sectores, especialmente del movimiento popular.

Callejas es un eslabón más dentro del proceso de "derechización" del área centroamericana y podemos caracterizarlo como un digno representante de una "derecha consecuente", es decir, que sabe dónde quiere ir, qué hacer y cómo. Por eso, su plan de gobierno está perfectamente bien programado en todas sus etapas. Cuando clausura la primera legislatura del Congreso Nacional, Callejas caracteriza los cuatro años de gobierno de la siguiente manera:

- a) Año 1990 es el año del reajuste económico. El año del sacrificio que impacta a las grandes mayorías, el año del desconcierto por los desniveles de los precios, el año necesario para que Honduras pudiera entrar por un nuevo cauce económico.
- b) Año del 1991 será el "año del fortalecimiento y reactivación de la economía histórica hondureña.... el año de la compensación social".
- c) El año de 1992 será el "año de la recuperación económica y del aprovechamiento efectivo del respaldo masivo que brinda a Honduras la comunidad internacional".
- d) El año de 1993 será el "año de la consolidación de la democracia".

Antes de la toma de posesión, lo central giró en torno al nombramiento del nuevo gabinete con lo que puso en evidencia la unidad, disciplina, liderazgo y consenso con que cuenta dentro del Partido Nacional (PN). No hubo la menor fisura de peleas internas y supo repartir los principales cargos entre los líderes de las principales corrientes internas del PN. Dicho gabinete se caracterizó por ser más técnico que político, afín a los deseos de los organismos internacionales y muy vinculado al sector empresarial hondureño. Eso ya indicaba claramente la orientación hacia el "programa de ajuste estructural" y la "privatización". Por lo tanto, es claro el peso, la importancia y prioridad concedida al problema económico del país y la dependencia de los organismos financieros internacionales.

Con motivo del discurso de la toma de posesión establece tres objetivos bien definidos.

El primero de ellos es la importancia concedida a la realidad centroamericana. Si no podía ser de otra manera, lo fundamental es que buen número de observadores lo interpretan como la pretensión de Callejas de tomar el relevo de Oscar Arias para asumir el liderazgo a nivel centroamericano. El segundo objetivo lo constituyen la prioridad de las necesidades básicas: "ambiente, educación, salud, vivienda, agua potable, luz eléctrica y aprovechamiento racional de las tierras son prioridad del gobierno a partir del 27 de enero de 1990". Si bien es cierto que citó también como prioridades el problema alimentario y la Reforma Agraria, sin embargo, su política económica se orientó por otros derroteros. Y como tercer objetivo aparece la resolución del problema económico como el mayor de Honduras a través de su historia.

La estrategia fundamental para conseguir estos objetivos será la "Concertación Nacional" pues "... para llevar a cabo este programa urgimos de una concertación nacional... y llamaremos a todos los sectores representativos de la nación".

En definitiva, según Callejas y en sus primeros pasos piensa que "solo con la concertación podremos salir adelante". Durante el mes de febrero se dará este coqueteo hasta que en marzo se apruebe el Decreto 18-90, que contiene la Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía. Ya en su gabinete hay quienes piensan que es prácticamente imposible esperar el consenso para la toma de decisiones. Pero una vez emitido el Decreto 18-90 nunca se retrocederá y pondrá de manifiesto que la "concertación nacional" es pura retórica pues de lo único que se trata es imponer coercitivamente el modelo neoliberal de desarrollo económico, el cual nunca va a ser apoyado por la clase media, obrera y campesina pues son quienes cargan con el costo social del mismo.

A partir de este momento todo se centra en el programa económico y el dar todos los pasos requeridos por el Fondo Monetario Internacional para poder restablecer las relaciones con los organismos internacionales. Hay, pues en todo ello, una secuencia lógica desde la creación del FHIS (Fondo Hondureño para la Inversión Social), la reducción del presupuesto nacional en un 10%, el anuncio en febrero por parte del ministro Benjamín Villanueva afirmando que en tres meses firmaría la carta de intenciones con el FMI, la emisión de la Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía, el viaje a Washington para conseguir el préstamo puente, la declaración nuevamente de "elegibilidad" por parte del FMI y la concesión de los \$ 90

millones para la implementación de la segunda parte del "programa de ajuste estructural" (PAE).

Antes de emitir la "Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía" se crea el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Está orientado a compensar los efectos negativos que pueden resultar como consecuencia de las medidas económicas gubernamentales. En otras palabras, está pensado para neutralizar el descontento de los sectores urbanos marginales donde surgirán las mayores protestas e intento de subvertir la situación creada. El FHIS está concebido para beneficiar a 300.000 personas a lo largo de tres años. Creará 6.000 empleos directos y 9.000 temporales.

1.2. La implementación del proyecto

Si la Concertación no ha sido el medio para implementar el "Programa de Ajuste Estructural", ¿en dónde se apoyó Callejas para realizarlo? El solo hecho de decir que obtuvo el 51% de los votos en las elecciones pasadas no es suficiente, debido a lo impopular de las medidas adoptadas. Callejas utilizará como arma de división y destrucción de las organizaciones obreras y sindicales, así como la creación de directivas paralelas. Al mismo tiempo, se acompaña de una militarización de la sociedad (si es necesario), la represión selectiva, la campaña de desprestigio hacia las organizaciones populares y una manipulación de los medios de comunicación para justificar las medidas económicas. El otro elemento es estrechar la alianza con las FFAA, la cual se reforzó inclusive en medio de la crisis del instituto castrense otorgándole el presupuesto en dólares y manteniendo el mismo número de efectivos.

"Los PAE, encaminados a reducir el déficit fiscal y a controlar la inflación, deben imponerse sin escuchar los reclamos y opiniones de la gran masa de la población que se ve afectada por sus secuelas: recesión, desempleo.... Los "ganadores" no sólo de las víctimas... como no se puede realizar una represión generalizada, se ha recurrido al control de las organizaciones sindicales más beligerantes, mediante la creación de organizaciones afines, al gobierno y a la división misma del sindicato (casos de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH) y el Sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad Co. (SITRATERCO). Por otra parte, se recurre a la represión selectiva de aquellos dirigentes populares que no coinciden con la posición del gobierno... o las campañas ideológicas tendientes a desprestigiar a las organizaciones sindicales y a legitimar las medidas económicas adoptadas.

Paralelamente a la neutralización de los sindicatos se da el apoyo de las FFAA al PAE".(1)

Las FFAA han salido beneficiadas al legitimarse en su función dentro de la sociedad civil y lograr la no reducción de sus efectivos y del presupuesto militar, tal como lo reclama la situación económica del país y el cambio geopolítico regional e internacional. El intento de neutralización del movimiento popular y los sindicatos, en parte han sido éxito de Callejas y en parte obedece a los problemas internos que atraviesa, como veremos adelante.

En el ámbito político interno ya se ha insinuado que Callejas prácticamente no tiene oposición y su tarea se ve facilitada, tanto por las crisis internas del resto de los partidos como por concentrar en sus propias manos los tres poderes del Estado. Respecto a los sectores empresariales no se han dado más que discrepancias superficiales, habiendo un acuerdo de fondo fundamental en cuanto a la lectura de la crisis y su solución. Hasta el momento no se han llevado hasta sus últimas consecuencias los dos problemas que pueden causar más fricción con el gobierno: la repatriación de las divisas y la obtención de los dólares para la importación. No parece ser que todo haya quedado resuelto con la unificación del mercado intercambiario y el control del mercado negro mediante la concesión de los dólares únicamente a través el Banco Central. Respecto al propio partido, es de resaltar la cohesión, orden y disciplina realizados. En un momento dado aparecieron las precandidaturas presidenciales, las cuales una vez silenciadas no supusieron el desgaste ocasionado al partido Liberal (PL) en la legislatura anterior. El nuevo rol de asumir la herencia de Oscar Arias se ha visto facilitada por la ausencia de graves desequilibrios a nivel interno y, al mismo tiempo, por la simetría política en la región una vez derrotado el Frente Sandinista.

Al abordar la "política económica" Callejas había señalado la bancarrota del país y la necesidad de aplicar el "Programa de Ajuste Estructural" para reconciliarse con los organismos financieros internacionales. Esto quiere decir simplemente el cumplir a cabalidad todas las exigencias para obtener del exterior los recursos que se necesitan y no se obtienen del propio país. Dicho llanamente significa que "a mayor necesidad de recursos, mayor sumisión a los organismos financieros internacionales". Pero no debemos olvidar que uno de los objetivos de esta política "es la reasignación de los recursos productivos, incentivando a los sectores agroexportadores, a las transnaciona-

les y maquilladoras, así como a los sectores financieros"(2). La "política económica no está orientada a la satisfacción de las necesidades de las mayorías del país y poder afrontar los problemas del empleo, pobreza creciente, seguridad alimentaria y condiciones de vida digna para todos y no sólo para una élite. Prueba de ello es la gran laguna de la Reforma Agraria que no aparece contemplada en el PAE. Tal vez por ello se ha dado mucha publicidad a la "Concertación Agraria", la cual es considerada como la manera de paralizar la reforma agraria y controlar las invasiones de tierras.

Las FFAA ocupan un lugar importante dentro del plan de Callejas como ya se acaba de insinuar. Los conflictos con la sociedad civil (necesidad de aportar su cuota de sacrificio reduciendo el número de efectivos y el presupuesto, la no obligatoriedad del servicio militar, el cuestionar "un ejército rico en un país pobre", los ataques y acusaciones al movimiento popular, la campaña de delación...) no han sido lo suficientemente fuertes como para acabar en la supeditación del poder civil al militar. Callejas las ha utilizado en los momentos clave del escenario político con el objetivo que el reclamo y protesta contra las medidas económicas no vayan más allá de ciertos límites. En este accionar, tanto el gobierno como las FFAA salen reforzados y se apoyan mutuamente. Como Callejas necesita continuar con su plan económico y las FFAA mantenerse dentro de los mismos parámetros en que lo han hecho hasta ahora, este apoyo mutuo seguirá en el futuro a pesar del desgaste que les ocasiona a ambos.

Respecto al "movimiento popular" la política callejista ha seguido la consigna de "división-control-neutralización". Es el sector del que pueden provenir más cuestionamientos a su política económico-social y fuente de desintegración social. Para ejecutar su programa ha tratado de controlar al movimiento popular donde es posible (caso de Oscar Escalante y la CGT), dividirlo mediante la creación de directivas paralelas (el caso más notorio ha sido la ANDEPH) o de neutralizarlo (mediatización de las pláticas con la Plataforma de Lucha o el logro de las Concertación Agraria). Esto se ha visto acompañado de la militarización (caso de las protestas populares o la huelga del SITRATERCO), intervención en momentos claves (huelga de las bananeras y parcialización hacia las transnacionales), represión selectiva (muerte de los sindicalistas), amenaza constante a lo largo del año de reformar el Código de Trabajo (para anular el derecho de huelga) y la creación de grupos de apoyo y/o choque ("Agui-

las Azules", Gapen...). Si a este panorama unimos las crisis interna por la que atraviesa el movimiento popular se comprende fácilmente el éxito de Callejas para llevar adelante su proyecto en este año. La creación del FHIS hay que entenderlo como un intento de contener las protestas sociales de los sectores marginales urbanos, los cuales son uno de los más golpeados y con un potencial explosivo grande.

La "Concertación Agraria" quería conciliar a ganaderos terratenientes y campesinos por medio de un acuerdo aceptado por todos. El que se diera tanta importancia como paso fundamental en el proceso de "concertación nacional" pone de relieve lo necesario que es para Callejas conseguir legitimidad y consenso entre los diferentes sectores sociales por ser el medio más efectivo para ejecutar su proyecto económico-social. Le ha quitado su fuerza el hecho de que las organizaciones campesinas más representativas no hayan firmado el acuerdo por considerarlo una trampa para el campesinado e, igualmente, por la parcialización del INA hacia la Standard en el sector de Tocoa-Sabá-Olanchito.

La habilidad de Callejas para manejar los medios de comunicación apareció con mucha nitidez en la campaña electoral pasada, y, más todavía, si lo comparamos con las actuaciones poco afortunadas del presidente anterior (José Azcona) o el ex-Comandante en Jefe de las FFAA, General Arnulfo Cantarero López. Aparte de sus cualidades personales, sabe utilizarlos como plataforma de comunicación con ocasión de cualquier problema nacional. Pero Como todo político, sabe que lo más importante consiste en la capacidad para crear una imagen favorable u hostil hacia determinada política, el poder moldear una mentalidad colectiva o manipular la verdad parcializándose hacia determinados intereses. Ejemplo de ello fue la protesta de productores de leche cuando la emprendieron con los medios por haber creado un ambiente hostil hacia el aumento de la leche; y, en estos últimos días, el gran enojo de los diputados contra diario Tiempo por haber desenmascarado el "carrazo" en la última sesión extraordinaria del Congreso Nacional.

Y, ciertamente, no ha desaprovechado este potencial dirigiéndolo hacia objetivos fundamentales. En primer lugar, una campaña sistemática respecto a las medidas económicas inculcando en la población, mayoritariamente poco instruida, la necesidad de las mismas y las únicas como solución para salir de la crisis económica. En esta dirección se orientaba la "campaña de ablandamiento" para justificar el aumento a los

servicios públicos. En segundo lugar, a lo largo del año ha salido repetidas veces la acusación de periodistas comprados, más específicamente hacia el "Grupo de los 13" quienes recibían más de 30,000 lempiras mensuales por guardar silencio o hablar en favor del gobierno. En el mismo sentido, la existencia de más de tres millones de lempiras para pagar a periodistas y a algunos medios de comunicación. Por último, señalar que Callejas ha seguido utilizando la mordaza de la "cadena nacional" en momentos de crisis con la pretensión de imponer la versión oficial y que no se escuche la reacción del pueblo en general.

Respecto a la "política exterior" ha continuado la supeditación a la geopolítica estadounidense en el área. Muy tempranamente Callejas reconoció el gobierno de Endara, en contra del sentir de los países latinoamericanos, con lo cual se legitimaba la invasión a Panamá, la violación al derecho internacional y el recurso a la fuerza por parte de EEUU en la protección de lo que considera sus intereses estratégicos; además, suponía dejar la puerta abierta a nuevas invasiones en el futuro. A la Contra se la amparó hasta el final por ser la carta de EEUU para obtener el mayor número de concesiones del Frente Sandinista antes de entregar el poder. Con relación al proceso de pacificación centroamericano nunca hubo oposición a la nueva política implementada por Washington de reducir la ayuda militar e iniciar el desarme, sobre todo con el ejército sandinista.

La presencia de las tropas y maniobras militares no se cuestionaron bajo ningún concepto: "nosotros partimos de la premisa de que las tropas de EEUU en Palmerola están allá parra el propósito de ejercicios militares temporales con las Fuerzas Armadas de Honduras con el objetivo de mejorar las posibilidades militares del ejército hondureño (...) se quedan en Honduras por lo menos en lo que resta del año... y su permanencia se orientará a capacitar al ejército en ecología y tráfico de drogas". Y como muestra de la supeditación a la "política de fuerza" estadounidense se aprestó inmediatamente a condenar la invasión de Irak a Kuwait y anunció el envío de un "contingente de seguridad" al Golfo Pérsico formado por 750 soldados.

1.3. EL PROGRAMA ECONOMICO DE CALLEJAS

Ya desde el inicio de su gobierno Callejas se había planteado como uno de los objetivos fundamentales el enfrentar la crisis económica del país. Tanto sus primeros pasos como la

formación del gabinete o el discurso de la toma de posesión se orientan en esta dirección.

Pero todo hay que decirlo, con el gobierno liberal de Azcona del Hoyo se habían aprobado varias leyes para promover las exportaciones: Ley del Fomento de las Exportaciones, Ley de Importación temporal, Ley que regula el funcionamiento de los parques industriales y varias leyes que incentivaron la inversión extranjera. Estas medidas se aprobaron por la condicionabilidad de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) para desembolsar la ayuda económica. Pero con Azcona no se consiguió devaluar la moneda ni reducir el déficit fiscal.

Los principales lineamientos de la Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía (LOEE) son los siguientes:

1.-Liberalización comercial: se reforman los gravámenes o impuestos a la importación de mercancías. Es una desgravación progresiva hasta homogenizar los aranceles a partir de 1992. Esta es una exigencia del Banco Mundial y traerá como consecuencia un perjuicio grande a la pequeña y mediana empresa, las cuales no pueden competir mucho pero sí emplean mucha gente.

2.-Política cambiaria: se realizó la devaluación. Inicialmente se estableció la tasa de cambio en \$ 1 = 4 lempiras en el mercado interbancario.

3.-Política fiscal: se aumentó el impuesto sobre ventas (ISV) del 5 al 7%, el impuesto al petróleo asciende a un 27% y el impuesto sobre la renta (ISR).

4.-La eliminación de exoneraciones y el control para evitar la evasión de impuestos

5.-Transferencias corrientes. Se conceden diversos subsidios: al transporte urbano, a los niños en edad escolar, al precio de los productos básicos alimenticios, al Banco de tierras para viviendas de grupos marginados, al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) cuyo fin es generar empleo e ingresos a unas 300 mil personas y durará tres años. El total de los subsidios para 1990 es de 98 millones de lempiras.

6.-Control de las Organizaciones Populares. Para realizar el control social lo más efectivo es por medio de regímenes de fuerza, pero dado el contexto centroamericano no se hace mediante la utilización de tres medios:

a) el control de las organizaciones más beligerantes de oposición a la política gubernamental (ANDEPH)...)

b) represión selectiva de los dirigentes po-

pulares

c) campaña ideológica para legitimar las medidas adoptadas (3).

Paralelo a todo lo señalado anteriormente se acentúa el proceso de privatización y con tal fin se creó una Oficina de Privatización adscrita al Ministerio de Hacienda. Entre las empresas y servicios que se pretenden privatizar tenemos las siguientes: Recursos Naturales, Instituto Nacional Agrario (INA), Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), Secretaría de Comunicaciones Obras Públicas y Transporte (SECOPT), Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), Centro Técnico Tipo-Litográfico Nacional (CETTNA), Centro de Desarrollo Industrial (CDI), Crédito Prendario Popular (CPP), Suplidora Nacional de Productos de Consumo Básico (BANASUPRO), Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria (FECORAH), Federación de Asociaciones de Ahorro (FACAH), Instituto Hondureño de Café (IHCAFE), Corporación Hondureña del Banano (COHBANA), Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Servicios de la Municipalidad de mercados y tren de aseo.

Una vez aprobada la "Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía" (LOEE), Callejas inició una "ofensiva internacional" para convencer a los acreedores del despegue económico del país.

Esta ofensiva culminó en el mes de junio al obtener un "préstamo-puente de \$ 245.7 millones desglosados de la siguiente manera: a) Estados Unidos \$ 122.3 millones, b) Venezuela \$ 40 millones, c) México \$ 25 millones, d) Japón \$ 47.6 millones y Honduras \$ 10.8 millones. El objetivo del "préstamo-puente" era reabrir las puertas financieras internacionales para tener acceso nuevamente a los recursos externos. Inmediatamente el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) declararon oficialmente que "Honduras ha sido retirado de la lista de los países no elegibles para créditos". Con esto, pues, sale de su situación de "ineligibilidad".

Posteriormente el Congreso Nacional aprobó el aumento a los servicios públicos de la energía eléctrica, agua, teléfono y servicios de alcantarillado.

- La energía eléctrica aumentó más de un 50%
- El agua entre un 12 y 100% (dependiendo de la zona residencial)
- El teléfono nacional casi en un 100%
- El teléfono internacional en un 200% y
- El metro cúbico de madera en un 200%

Igualmente aumentaron los materiales de construcción, las medicinas entre un 90 y un 300%, los de la canasta básica entre un 30 y 300%, siendo la leche uno de los productos de mayor aumento. Pero el aumento de los precios no fue lo único puesto que va unido a la "escasez de divisas" en el país, hecho contrastante con las cantidades depositadas en los bancos estadounidenses. Ultimamente se barajaba la cifra de 1,000 millones de dólares depositados en Estados Unidos, aunque también se dijo que entre 1971 y 1987 se han fugado del país 2,156 millones de dólares (Tiempo: "Martes financiero", 27/XI/90).

Con objeto de reducir la demanda interna de divisas el gobierno pretende aprobar un decreto sobre el "Impuesto Selectivo al Consumo" con el cual grabarán entre un 10 y un 30% a unos 200 productos considerados suntuarios e importados, siendo la más afectada con tales medidas la clase media. En estos momentos el gran interrogante es saber si Callejas tendrá el valor de plantearse el problema de la "repatriación de las divisas" y el consiguiente enfrentamiento con las compañías transnacionales y los empresarios.

II Parte del PAE

En el mes de octubre el Banco Mundial otorgó 90 millones de dólares para respaldar la segunda parte del PAE. Las medidas económicas de esta segunda etapa son:

- 1.- Elevar las tarifas de los servicios públicos (agua, luz y teléfono), las cuales habían sido aprobadas por el Congreso en el mes de Agosto.
- 2.- Implementación del "Impuesto selectivo al consumo" que grabará las importaciones de 200 productos considerados suntuarios.
- 3.- Aumento a la tasa de interés bancario.
- 4.- Reducción del déficit fiscal. Para 1991 se pretende una reducción del 4% respecto al 1990.
- 5.- Reducción del tamaño del gobierno (se piensa en el despido de 10,000 empleados públicos).
- 6.- Incentivos a la exportaciones y promoción de la producción agrícola.

Hay que señalar que los préstamos concedidos por el Banco Mundial (BM), El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comunidad Económica Europea (CEE) se debieron a la implementación del PAE y la continuación del mismo en la segunda etapa.

En estas circunstancias es cuando se rene-

gocian con el Club de París" 170 millones de dólares de los 950 que tiene de deuda con dicho organismo. Por otra parte, el gobierno busca financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la reconversión industrial del sector empresarial. Y Callejas, finalmente, solicita del Congreso de Estados Unidos una ayuda de 132 millones de dólares desglosada de la siguiente manera: a) 80 para la balanza de pagos b) 13.8 para proyectos especiales c) 41 para ayuda militar.

El gobierno había realizado a comienzos de año un aumento salarial del 38% y realizó en el mes de octubre un nuevo reajuste. Se hizo en base a los datos del Banco Central acorde con el Índice inflacionario: como éste era de un 24% el salario aumentó en un 22%. A excepción de la empresa privada (COHEP) nadie lo consideraba con el aumento a los combustibles realizado por las mismas fechas.

Con la subida de los precios de los combustibles y la devaluación del lempira, aumentó la inflación, la cual afecta fundamentalmente a las clases pobres. Los productos básicos son alterados periódicamente según el precio del dólar en el mercado negro. Las medidas económicas han resultado exitosas para los exportadores, los "grandes ganadores del programa de ajuste". El nuevo salario mínimo resulta un paliativo insuficiente para la población.

El alza que se hizo a los combustibles fue de un 80% y se fijó en base al precio que el barril tiene en el mercado internacional. La gasolina super aumentó en un 88%, la corriente en un 68% y el diesel en un 74%. Por otra parte, la devaluación constante repercute en las importaciones, medicinas, repuestos e insumos agropecuarios e industriales. La falta de divisas se debe fundamentalmente a que los exportadores sólo entregan entre un 9 y 12% por concepto de impuesto a sus exportaciones, dejando fuera del país todas sus divisas. Los empresarios no critican el tipo de cambio puesto que los costos de producción los trasladan al consumidor.

Hacia el último trimestre del año se conocen algunas de las nuevas medidas a tomar por el gobierno para el año 91, las cuales aparecieron en el convenio de préstamo por 90 millones de dólares suscrito por el gobierno y el FMI. Entre las nuevas medidas figuran:

- 1.-Eliminación de las restricciones de importación para productos agrícolas.
- 2.-Abolición de las licencias de importación.
- 3.-Se reducen o eliminan los impuestos temporales de exportación sobre bienes tra-

dicionales o no tradicionales.

- 4.-Estudio de un nuevo sistema de incentivos para los exportadores.
- 5.-Reemplazamiento del sistema de precios de garantía para el maíz por un sistema tributario flexible.
- 6.-Eliminación del sistema de precios de garantía y control de precio de los granos básicos.

Ni que decir tiene el que las dos últimas medidas anunciadas son las que causarán más daño a la economía familiar al ser liberados los granos básicos quedando sujetos al libre juego de la oferta y la demanda.

Callejas concluyó su primera fase adoptando una serie de medidas: a) unificación del sistema cambiario b) liberalización de la tasa de interés cambiario c) aumento a las tarifas del transporte público y d) fijación de una nueva tasa dejen el factor de valoración aduanera. El 11 de octubre fue la fecha en que se unificó el sistema cambiario (oficial y negro) fijando el valor del dólar a 5.50 Lps. La asignación de divisas a los particulares para cantidades mayores a los 2,500 dólares se hará por medio del Banco Central y de forma cronológica. El factor aduanero se fijó en 5.50 Lps. Y como colofón, el transporte de carga y de pasajeros aumentó entre el 33 y 43% para compensar el alza del combustible.

El único decreto que se rechazó fue el "Proyecto de Ley del Impuesto Selectivo" esperando mejor suerte para el próximo año.

LA GUERRA DEL BANANO

Después de varios meses de pugnas entre el consorcio europeo FYFFES y la Tela Rail Road Company dio fin a lo que se llamó la "guerra del banano". La "Chiquita Brands" renunció a su pretensión de mantener la exclusividad en la comercialización del banano producido por CAGSA (Compañía Agrícola Ganadera de Sula) hasta diciembre de 1991. Para el resto del año (1990), CAGSA venderá el 60% de la producción (60,000 cajas) a la Tela y el 40% a FYFFES (Consortio británico). Desde el 1 de enero hasta el 9 de abril de 1991 la proporción será de 55% para la Tela y el 45% para FYFFES; y, después de esa fecha, CAGSA será libre de vender toda su producción al mercado europeo o a cualquier otro consorcio. Lograron también que la Tela pagara en dólares. La Tela paga 3,00 \$ por caja y la FYFFES 4.40 \$. Asimismo la Tela indemnizará a los productores por las 300,000 cajas que no pudieron exportar.

El significado del acuerdo a que llegaron es la liberación del dominio absoluto de las transnacionales de Estados Unidos que han impuesto sus precios y condiciones en la compra de la fruta a los productores locales. La FYFFES por su parte planea comercializar piñas, cítricos, melones y otros productos.

II. FUERZAS ARMADAS

A lo largo del año los diferentes episodios en que han sido protagonistas las Fuerzas Armadas han puesto en evidencia dos hechos importantes. Por un lado, han sufrido el impacto de la nueva correlación de fuerzas a nivel mundial (distensión causada por el fin de la guerra fría) y regional (homogeneidad política en el área por la derrota del frente sandinista y el desarme consiguiente en los ejércitos). Por otro lado, ha sufrido el impacto de la crisis económica nacional que exige la reducción, tanto del presupuesto militar como del número de su efectivos. A esto hay que añadir dos novedades importantes. Por primera vez afloraron a la opinión pública los conflictos internos y crisis de poder por la que atraviesa la institución castrense (carta de renuncia de los coroneles de la quinta promoción en el mes de febrero y la destitución del general Cantarero López) y, también, casi por primera vez se da un enfrentamiento entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas debido al cuestionamiento del servicio militar obligatorio, lo cual les ha llevado a adoptar una postura defensiva.

El general Cantarero López estrenó su mandato en el momento en que se hizo pública la lucha interna por los ascensos del poder entre las promociones de oficiales y la demanda de la reducción al presupuesto de las FFAA. Por sectores de la oposición, al mismo tiempo que se confirmó el recorte de la ayuda militar de EEUU a Honduras.

El ejército trata de presentar una nueva cara debido a la distensión mundial y homogeneización del área y se presenta en la sociedad como integrado a la actividad productiva del país en lo agrícola. Aunque algunas voces lo ven como un intento de controlar al campesinado no cabe duda que, en el fondo, se trata de autolegitimarse debido a lo elevado del presupuesto, el cual ya no se justifica bajo ningún concepto.

La lucha por el poder entre las diversas promociones salió a la opinión pública con la renuncia en pleno de la "cúpula de la quinta". Es la presión continua de una capa amplia de oficiales sobre la estructura militar para usufruc-

tuar los privilegios que conlleva el ejercicio de altos rangos. El motivo de la renuncia fue por no estar de acuerdo con el procedimiento de selección de la terna para que el Congreso Nacional eligiera al Jefe de las FFAA y, asimismo, por una serie de irregularidades cometidas por el general Regalado Hernández durante su gestión. El retiro fue prematuro y forzado por las circunstancias. Niegan que se les atribuyan responsabilidades que le competen al comandante en jefe, general Regalado Hernández, con el apoyo de los oficiales de la sexta promoción y que ahora ejerce el general Cantarero López apoyado por la octava y novena promoción. Fueron, por otra parte, objeto de una campaña de desprestigio sistemático. La carta, leída en una emisora de radio y publicada en los periódicos, aparece firmada por los coroneles Leonel Riera Lunati, Leonel Gutiérrez Minera, Carlos Reyes Barahona, José Edmundo Alcerro y Roberto Núñez Montes.

Además hay descontento en cuanto al uso de la ayuda militar concedida debido a la malversación de fondos. Todos estos elementos son el marco general dentro del cual se iniciará el general Cantarero López.

Otro elemento que ha puesto en cuestión la imagen de las FFAA en la sociedad y su pérdida de credibilidad ha sido el servicio militar obligatorio. Sobre todo por contar con el apoyo, tanto de padres de familia como de estudiantes, en contra de los métodos crueles de reclutamiento. Pero el conflicto estalló cuando el diputado Gustavo Alfaro presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley tendiente a reformar la Constitución de la República.

La respuesta fue en tono agresivo y amenazante: "No amenacen al tigre", afirmó el vocero oficial, coronel Oscar Flores. Además rememorando la historia dijo a los parlamentarios que en 1904 el ejército intervino en la Cámara Legislativa encarcelándose, en aquel entonces, a once diputados. Todo se interpretó como una amenaza para impedir tal aprobación. El complejo de mártir de la institución castrense sale siempre a relucir pues lo explican siempre como "una campaña bien orquestada contra las FFAA". Una vez que el Congreso rechazó la aprobación, el coronel Flores recalcó nuevamente que el servicio militar seguirá siendo obligatorio puesto que no han desaparecido las amenazas internas y externas contra la seguridad del país.

Con las FFAA sucede igual que con otros sectores de la sociedad que son reacios y tardos para asimilar la nueva correlación de fuerzas internacional y regional operada con el

fin de la guerra fría y la derrota del Frente Sandinista. Lo de la distensión no se conoce y sigue siendo elemento dominante el tono belicista de la más pura doctrina de la Seguridad Nacional. Por eso llegan a plantear para los países vecinos la reducción militar, tesis que no es válida para el propio país argumentando que posee el ejército más reducido; y cuando la subversión local no es suficiente, el peligro proviene de El Salvador y Guatemala, o Nicaragua si es necesario nuevamente. El poder civil en su papel sumiso repite las mismas tesis. Así, Rodolfo Irujo Navas afirmaba que mientras no se resuelvan los conflictos de la región y persistan los problemas limítrofes "es necesario un ejército tan profesional o aún más del que tenemos en este momento".

Pero este discurso belicista y agresivo, con diferentes argumentaciones aparecía de manera intermitente. Expresión de eso tenemos lo siguiente:

- Los subversivos se encuentran muy activos y que, sumados a la existencia de enemigos históricos vecinos, obligaban a mantenerse alertas y a acrecentar la fuerza naval para enfrentar problemas en la frontera marítima (coronel Mario Amaya en Colón).
- Las organizaciones populares sirven de fachada de los que trabajan por desestabilizar y destruir la democracia en Honduras (coronel Alvaro Armijo Reyes).
- "La democracia no se mantiene con letrados ni con violines, se mantiene con las armas" (General Arnulfo Cantarero) (4).

Todo ello es visto como una escalada contra el instituto armado quien cita como prueba irrefutable las críticas de la población contra las medidas económicas y las arbitrariedades de los uniformados hacia la sociedad civil.

Lo que todo esto deja en claro es que tanto los funcionarios civiles como militares han coincidido en rechazar la reducción del aparato militar y su presupuesto, el cual después de muchas polémicas se "redujo oficialmente" en un 10%, aunque para algunos en realidad no deja de ser un 3%. Tampoco se han atendido las demandas de disolución por parte del Estado hondureño de los cuerpos paramilitares y el esclarecimiento de los asesinatos contra dirigentes populares.

Debido a que continúa la militarización de la sociedad, en el mes de agosto iniciaron la famosa "campaña de delación". Se garantizará recompensa y anonimato para quienes delaten personas o lugares vinculados al tráfico de

armas o la subversión. Con ello se invita a la población a ejercer labores de espionaje y delación antisubversivas. Esto se contextualiza al final de la huelga bananera de 43 días, la cual concluyó con la derrota del movimiento popular y un reforzamiento del aparato militar: "el régimen hondureño dio una salida autoritaria al conflicto obrero-patronal al reprimir violentamente a los trabajadores, militarizar los centros de trabajo y desplegar al ejército. Las FFAA encontraron su función dentro de la sociedad y declaraban que la "fuerza izquierdista se está preparando para acciones de enfrentamiento y hay un accionar de masas que lleva el propósito de desestabilizar el gobierno". Para los militares las personas que se oponen al "orejismo" tienen cierta tendencia izquierdista anunciando que nuevos hechos de violencia se presentarán y demostrarán la necesidad de campaña emprendida por ellos.

Pero esta campaña de delación se vio desvirtuada por la policía misma con motivo del fallido asalto bancario en El Zamorano que dejó un saldo de 12 muertos, entre guerrilleros (del grupo político-militar Movimiento Popular de Liberación Cinchoneros: MPL-C), policías y civiles. "La operación policial fue presentada por los jefes militares como un éxito mientras amplios sectores de la sociedad condenaban la maniobra y censuraban a la policía por no haber prevenido la acción guerrillera, aprovechando la información previa de que ya disponía. Muchos son los que consideran la emboscada policial como un acto premeditado de exterminio contra los asaltantes guerrilleros" (5).

En todo ello no aparece el instituto castrense aislado, de ninguna manera, puesto que "la campaña de delación es parte integrante del programa de gobierno callejista, que la militarización de las ciudades, la represión de las huelgas de obreros y los renovados esfuerzos por incorporar la sociedad civil a los planes de militarización de la misma, creando un clima de verdadera guerra psicológica, son componentes de ese todo coherente y orgánico. Entonces puede deducirse que el gobierno de Callejas tendrá el signo de los regímenes de Seguridad Nacional de la década pasada, que con fachada civil y democrática, desataron un intenso programa de guerra preventiva que incluyó un virulento esquema de guerra psicológica contra el pueblo y la oposición en particular" (6).

La "campaña de delación" se fundamentó al decir que la guerrilla estaba presente en los departamentos de Olancho, Santa Bárbara, y Yoro. Aparte de ser un intento de afirmarse nuevamente en la sociedad y frente a la

sociedad civil, se pretenden varias cosas: a) con el pretexto de la subversión perseguir a los dirigentes y al movimiento popular b) justificar sus exigencias para evitar su reducción y que no se recorte la ayuda militar de EEUU. Al gobierno de Callejas le favorece esta actitud por cuanto se neutralizan o someten a los sindicatos y dirigentes, principal obstáculo para la realización del PAE.

El último hecho relevante dentro de las FFAA y que ha manifestado la fuerte crisis interna por la que atraviesa fue la destitución del General Arnulfo Cantarero López en el mes de diciembre. Aunque oficialmente se dijo que fue "por razones personales insuperables", en realidad, era un auténtico "golpe de estado militar". Ya la elección de Cantarero fue sorpresiva y contra todo pronóstico. Siendo alguna de las razones las siguientes: a) la acusación a Regalado Hernández de haberse apropiado de la ayuda militar estadounidense b) el descontento de los oficiales jóvenes por los ascensos y c) la acusación hacia Regalado de participar en el narcotráfico. Con su nombramiento realizó cambios y puso oficiales de su confianza en torno suyo, pero pasando por alto las promociones, grados militares y años de servicio.

Cantarero, dando continuidad a la política del instituto armado, desarrolló un fuerte anti-comunismo que se manifestó en varios hechos, tales como:

- a) frente a la moción para reformar la Ley del servicio Militar: "no acorralen al tigre, la institución es permanente y está consolidada". Esto fue en el mes de junio y se entendió como una amenaza velada de golpe de estado.
- b) en julio acusó al movimiento popular de ser autor de los asesinatos de los dirigentes sindicales (Francisco Javier Bonilla y Ramón Briceño), lo que se interpretó como una campaña sistemática contra dicho movimiento.
- c) en agosto es cuando las FFAA emiten un comunicado incitando a la población a "delatar a los grupos subversivos a cambio de una recompensa". Obviamente estaba dirigida la campaña contra el movimiento popular.

La inconformidad con Cantarero viene desde que toma el poder. Nunca fue líder de su promoción, pero se creyó que al elegirlo asumiría el papel de conciliador y sería buen conductor de las FFAA. Según Tiempo, en su editorial del 3/XII/90, "podrán hallarse varias causas para la caída del general, pero, en

último análisis, solamente una realmente válida: la proliferación generacional ya no permite el relevo del mando supremo en las FFAA de una generación a la siguiente, porque el tiempo no ajusta para satisfacerlas a todas".

Lo novedoso también de esta situación fue que, si bien Cantarero se mantuvo en silencio, su esposa, Lucy de Cantarero, pasando por encima de la "disciplina militar" no se inhibió ante los medios de comunicación y fue quien proporcionó algunos de los datos, tanto de las razones de fondo como la manera de realizar el "golpe de barracas". Los datos proporcionados serían los siguientes:

- a) Lo obligaron a renunciar por amenazas. Y fueron sus mejores amigos quienes lo traicionaron (...) lo hicieron venir de EEUU y lo recibieron con la renuncia ya redactada (...) Estaban en la base, Luis Alonso Discua y los otros coroneles de la terna (...) y lo amenazaron que si no firmaba le iba a pasar lo mismo que a Alvarez Martínez (...) la verdadera razón es la ambición de poder y lo han amenazado que si habla lo mandan fuera del país y le quitan todo los beneficios de que podía gozar como general.
- b) Hace cinco meses el coronel Discua hacía maniobras para quitar a su esposo... pero Cantarero de buena fe le perdonó y sólo les llamó la atención. Pero en su rueda de prensa medio insinuó que fueron los tres coroneles de la terna (Luis Alonso Discua Elvir, Guillermo Paredes y José de Jesús Banegas) quienes trataron de destituirle: "los tres son compañeros y amigos: los perdonó si llegaron a formar parte de la traición".
- c) Callejas de confabuló con los oficiales que le obligaron a renunciar.
- d) Cantarero tenía intenciones de realizar ciertos cambios en la cúpula castrense, entre ellos a Avila Soleno, a Discua y al comandante de la Fuerza Aérea, Roberto Mendoza Garay. Desvirtuó la versión relativa a que su destitución se debió a que traicionó a los miembros de la "sexta promoción" ya que si realizó cambios y rotaciones se debió a una necesidad.
- e) Le habían exigido la extradición de Regalado Hernández.
- f) Confirmó la noticia del mal manejo que algunos oficiales hicieron de la ayuda militar norteamericana, pero lo considera como un asunto interno de la institución.
- g) Hizo un "pacto de caballeros" en el sentido de no decir nada que afecte a nadie, especialmente al instituto castrense.

h) A pesar del "pacto de caballeros" está dispuesto a decir toda la verdad ante el Congreso Nacional.

i) Si considera que su destitución fue inconstitucional.

j) Según el vocero militar, Cantarero no puede ser interpelado por el Congreso Nacional dado que él no puede expresar conceptos en contra de la institución o que deterioren la imagen de la misma.

Con este episodio es difícil de justificar la "unidad granítica" de las FFAA, puesto que las fuertes divisiones dejan traslucir la crisis que atraviesa, tanto a nivel interno como frente a la sociedad civil. Al mismo tiempo empalidecen la imagen del gobierno callejista al término de su casi primer año de mandato.

III. MOVIMIENTO POPULAR

Para el movimiento popular el año 1990 ha sido un año crítico por cuanto ha señalado la exigencia de un cambio acorde con la nueva correlación de fuerzas externa e interna. En lo externo ah sido determinante el nuevo rumbo de los países del este, así como la pérdida de espacios políticos con motivo de la derrota del Frente Sandinista. Donde esto se ha reflejado con más fuerza ha sido a través de comunicados y pronunciamientos del movimiento revolucionario. A nivel interno, la llegada de Callejas significa la instauración en el poder de una "derecha consecuente", coincidente con la homogeneización política del área, planteando un gran reto al movimiento popular su programa debilidades del movimiento popular y, por otro, exige más que nunca su unificación y elaboración de un programa alternativo.

Con el objeto de tener una idea más precisa se analizarán tres momentos:

a) los principales hechos del movimiento popular a lo largo del año.

b) El reacomodo y planteamientos de los movimientos revolucionarios en la nueva correlación de fuerzas internacional y regional.

c) momento, tareas y alternativas del movimiento popular.

3.1. Principales hechos del movimiento popular en el año

Los primeros meses del gobierno de Callejas podemos caracterizarlos como "fase reactiva" debido a que el movimiento popular inicia una serie de acciones como "reacción" al Programa

económico del Gobierno. En esta etapa si puede afirmarse que se ha dado una "unidad coyuntural" la cual alcanzó su cenit el 10. de mayo, donde no sólomente desfilaron juntas las diversas organizaciones sino que emitieron un comunicado conjunto.

La primera crítica y protesta del movimiento popular se orientó hacia el incumplimiento de Callejas: había dicho que se analizarían las medidas en el marco de la Concertación Nacional y no se realizó. En vez de la "concertación" vino el "paquetazo". Después de eso la lucha del movimiento popular se dirige a defender la estabilidad laboral. Dado el elevado número de empleados públicos con que cuenta el Estado hondureño (se calcula en 80,000), Callejas emprende el problema del déficit fiscal y la reducción de gastos con una fuerte campaña de despidos masivos. Pero ello se hace violando la "Ley de Servicio Civil" y la "Ley de Administración Pública", que defiende los derechos de los empleados públicos.

El medio preferido por Callejas para cumplir tal objetivo será la creación de "directivas paralelas", siendo el éxito inicial el realizado con la ANDEPH (Asociación Nacional de Empleados Públicos). Pero también lo realizó posteriormente con otras organizaciones: SEP-CAMAT, CQCOCH, SITRAIHSS, Patronatos capitalinos, UNC, SITRAMUDIC, SITRATEL... y en otras más se intentó. Esto va estrechamente liga a la "cooptación de dirigentes sindicales" que, al ser diputados del PN o militantes del mismo, consigue neutralizarlos para sus propios fines. Tenemos ejemplo de esto a Oscar Escalante quien pedirá aplicar inmediatamente el PAE al gobierno y, arrogándose el ser portavoz del movimiento popular, afirmaba que "estamos dispuestos a sacrificarnos". También ha utilizado a sus partidarios como grupo de choque, más conocido como "Aguilas Azules". El GAPEN se creó para neutralizar y controlar a los colegios magisteriales, violentando su estabilidad laboral y conquista constitucional. En otras ocasiones se consiguió "grupos de apoyo", como el FASH.

En resumidas cuentas, Callejas utilizó como arma la división y destrucción de las organizaciones obreras y sindicales, bien sea a través de las "directivas paralelas" o por otros medios. Al mismo tiempo se acompaña de una "militarización de la sociedad" como se puso de manifiesto en la intervención del ejército con motivo de las protestas de los sectores populares ante el aumento del costo del transporte urbano. Tampoco han faltado las persecuciones y amenazas hacia los dirigentes populares e inclusive la muerte (de Francisco Bonilla y

Ramón Briceño). El objetivo de los asesinatos ha sido generar terror en la población para que no proteste por las medidas económicas. Otras acciones emprendidas por el gobierno, y no menos efectivas, han sido la campaña de desprestigio en los medios de comunicación, donde se confunde intencionadamente la defensa de los derechos de los trabajadores con la desestabilización y el comunismo. Asimismo la amenaza intermitente del Presidente del Congreso Nacional de proscribir el derecho de huelga sancionado por el Código de Trabajo.

La unificación del movimiento popular se dio en esta primera fase a diferentes niveles: en solidaridad y apoyo a la ANDEPH repudiando la escalada antisindical del gobierno, analizando conjuntamente las consecuencias del paquetazo, la marcha conjunta de protesta contra las medidas económicas pidiendo su derogación y la marcha conjunta del Primero de mayo, donde se leyó un comunicado aprobado por todas las organizaciones.

Los derechos que reclama y exige el movimiento popular durante estos primeros meses son: a) derogación de las medidas económicas b) derecho a la contratación colectiva, estabilidad laboral, libertad de organización y derecho a la huelga. c) oposición a la privatización y reestructuración de las empresas del Estado d) oposición al solidarismo patronal e) oposición al congelamiento de los salarios y al alto costo de la vida f) el no rebajar los presupuestos de carácter social como salud g) oposición a los despidos masivos h) control de las divisas por las exportaciones i) aumento de impuestos a los productos suntuarios y j) eliminación de subsidios y franquicias a las transnacionales.

Una idea de lo agitado que fueron los primeros meses del gobierno callejista es el saber que entre enero y julio hubo 35 huelgas, 26 conatos de huelga y numerosos paros y otros tipos de conflicto (7). La huelgas tuvieron como causa principales el reclamo de mejoras salariales, la oposición a los despidos y la solidaridad con otros movimientos huelguísticos. De todas las huelgas la más importante fue la que emprendió el SITRATERCO en contra de la Tela Railroad Company; el reclamo era el aumento salarial, duró 43 días y se convirtió en la más prolongada de la historia después de la del 54. Según el COHEP causó 139 millones de Lps. en pérdidas entre salarios no recibidos, ingresos fiscales perdidos, bananos no exportados y daños a las plantaciones.

La huelga del SITRATERCO fue motivada por la petición de aumento salarial. Los trabajadores pedían un aumento del 60%. Después

de 42 días de huelga intervino Callejas con una solución medio impuesta y con la fuerza de la militarización. Se recurrió a las FFAA para desalojar al sindicato de los campos bananeros y de las instalaciones de la Tela. La propuesta de Callejas, aceptada inmediatamente por la transnacional, supone un aumento del 25% y no incluía los salarios caídos. La Tela ofrecía de aumento un 14% solamente.

Una vez rechazada la propuesta gubernamental por parte del sindicato y ante la amenaza que la Plataforma de Lucha se iría a una huelga general en apoyo al SITRATERCO, intervino Callejas parcializándose hacia la transnacional. Los fracasos de las conversaciones entre ambas partes había ocasionado pérdidas por valor de \$ 60 millones. En la reunión del Consejo de Seguridad se analizó la posibilidad de decretar "estado de emergencia" y las FFAA se habían pronunciado diciendo que "los huelguistas se están extralimitando en sus demandas". La propuesta callejista no hacía justicia a los trabajadores pues no incluía los salarios caídos. El decreto presidencial declaraba implícitamente la ilegalidad de la huelga al establecer el derecho a reiniciar sus labores y autorizar a la transnacional a contratar nuevo personal para reanudar operaciones. Por si fuera poco se señalaba que el ejecutivo dictará todas las medidas necesarias para que se cumpla el mandato y pedía la cooperación de las FFAA. El sindicato, ante el peligro de su propia desaparición, no le quedó más remedio que aceptar la proposición gubernamental.

El resultado de la huelga fue crucial para el movimiento popular, pudiéndose decir que con su desenlace Callejas quebró las posibilidades de solidaridad y unificación del movimiento popular que pudieran conducir a la elaboración de un "proyecto alternativo" distinto al de los grupos dominantes. Es decir, que como resultado se obtuvo un debilitamiento aún mayor del movimiento popular. René Ayestas, presidente del SITRATERCO, se mostró desencantado de la "Plataforma de Lucha" debido al escaso apoyo de las organizaciones obreras, campesinas y profesionales. Los dirigentes, según los trabajadores, hablan bonito, pero a la hora de la verdad no hay acciones. Según el presidente del SITRATERCO, el movimiento sindical está politizado: "los dirigentes ven primero el color del partido y después los intereses de los trabajadores". El SITRATERCO llegó a anunciar en ese momento su retiro de la FESITRANH y de la Plataforma de Lucha. Aunque la Plataforma de Lucha, como acto de protesta contra el gobierno rompió el diálogo, la división estaba

consumada.

También tuvo que defenderse de los ataques provenientes de las ffaa, fundamentalmente. Para el estamento militar las organizaciones lo son de fachada y trabajan para anarquizar a Honduras. En el mismo sentido acusan a los líderes de corruptos que arrastran a los trabajadores a las huelgas. La respuesta del movimiento popular consistió en decirles que "las necesidades no tienen ideologías ni colores y los movimientos huelguísticos son resultado de las injusticias sociales; pelean por sus derechos y protestan por los salarios injustos y la aplicación de medidas impopulares".

Más grave que las declaraciones verbales fue la acusación como autor intelectual del asesinato de los sindicatos al secretario general de Fuerza Unitaria Revolucionaria (FUR) y coordinador de comunicación de Alianza Popular Unificada (APU) Angel Martín Pineda. El movimiento popular lo vio como un intento de desarticularlo. El diario Tiempo en su editorial (6/V/II/90) afirmaba: "al parecer esta escalada represiva -y definitivamente terrorista- va ampliándose con el propósito de justificar a la entidad militar como indispensable para la seguridad nacional, lo cual a su vez significa el disfrute no solamente de un abultado presupuesto nacional de más de 500 millones de Lempiras al año, sino el usufructo de varios renglones de la administración del Estado como el de Telecomunicaciones, Migración Navegación, buena parte de Relaciones Exteriores, Reforma Agraria y otros".

Es obligado decir algo sobre la "Concertación Agraria", la cual fue señalada por el gobierno como un gran paso dentro de la "Concertación Nacional". Este éxito, sin embargo, no fue tanto puesto que tres de las organizaciones más influyentes no firmaron el acuerdo: la CNTC, la ANACH y la OCH. La "Concertación Agraria" estableció los objetivos, estrategias y políticas para: a) mantener la paz y la tranquilidad social b) promover la producción y la productividad y c) propiciar la seguridad de la tenencia de la tierra.

La suscribieron la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), la Coordinadora Nacional de Campesinos de Desarrollo de Honduras (CONACADH), el Instituto Nacional Agrario (INA) y el Presidente Rafael Leonardo Callejas. El no haber firmado todas las organizaciones le restó legitimidad y no lo hicieron porque consideran es "un compromiso para paralizar la Reforma Agraria" y pedían,

además, la supresión del Decreto Antiterrorista, así como un indulto a los campesinos acusados de terrorismo.

La "Concertación Agraria" es por tiempo indefinido y se propone tres objetivos:

1. Mejorar los niveles de producción y productividad de los granos básicos para satisfacer la demanda alimentaria interna, sin descuidar los productos de exportación tradicionales.
2. Que los sectores concertados participen en las instancias de decisión.
3. Que los programas a desarrollarse tengan como sujeto y objeto al hombre.

La "Concertación Agraria" se acompaña de las siguientes medidas: a) realización de un Censo Agrario y una evaluación del suelo. b) enmarcar las demandas y adjudicaciones de tierras dentro de las prioridades regionales. c) compromiso de los campesinos para explotar eficientemente la tierra. d) compromiso por parte de todos el cumplimiento de la Ley Agraria. e) respeto a los predios explotados eficientemente y entrega de certificados de inafectabilidad. f) garantía de precios mínimos a los granos básicos. g) dar asistencia técnica, financiamiento y supervisión a la producción de granos básicos.

Con la "Concertación Agraria" se ve como "ganadores" a los terratenientes y ganaderos dado que no habrá invasiones e tierras, las cuales pasan a ser controladas.

Y, por último, decir algo respecto a la Amnistía emitida el mes de diciembre. Fue una gran decepción por cuanto resultó algo parecido al "parto de los montes". En vez de ser una "amnistía general e incondicional" se vio reducida a una "amnistía parcial" para liberal a algunos campesinos. Tanto los partidos de la oposición como los grupos de derechos humanos pedían un amnistía general que favoreciera a los presos políticos. Pero, según Callejas, en el país no hay presos políticos.

Por lo tanto, la amnistía comprendería en principio a los campesinos a quienes se les ha aplicado la Ley Antiterrorista por la recuperación de tierras. Pero el desmentido mayor vino cuando los dirigentes de ACAN-UNC dijeron que "ni a los propios campesinos beneficiará el parcial decreto de amnistía aprobado por el Congreso Nacional pues se trata de una burla y una farsa. Los agricultores y ganaderos se inventan los procesos de usurpación de tierras, amenazas a muerte, hurto de ganado mayor, etc. Los que están en prisión no están acusados

por delitos políticos sino por delitos comunes. En resumidas cuentas, lo que se busca es hacerle al gobierno una imagen a nivel internacional: es una amnistía que no abarca a nadie pues no reconoce presos políticos y los campesinos están acusados de delitos comunes.

3.2. Reacomodo y planteamiento de los movimientos revolucionarios en la nueva correlación de fuerzas.

En la opinión pública apareció un campo pagado suscrito por diferentes movimientos de liberación del continente y, entre ellos, el Partido Comunista Hondureño en el exilio. Allí analizaban la crisis de los países del este, la crisis mundial y la nueva correlación de fuerzas. Más concretamente, la haber crisis de modelos y espacios políticos la situación obliga a buscar soluciones dentro de la propia idiosincrasia latinoamericana. Debido al repliegue de la Europa del este y que los movimientos de liberación quedan solos y enfrentados a EEUU, resulta más imperioso la búsqueda de nuevos métodos de tipo parlamentario o político, así como la negociación.

Gustavo García España, fundador y jefe del Frente Morazanista para la Liberación de Honduras (FMLN) regresó a Honduras en el mes de mayo y es de la opinión que la organización político-militar de izquierda no tiene futuro en Honduras en tanto las masas sigan creyendo en la alternabilidad de los partidos tradicionales en el poder. El fracaso de la columna guerrillera comandada por Chema Reyes demostró que en el país no hay condiciones objetivas para la lucha armada y esto les llevó a abandonar la línea militar. A pesar del entorno centroamericano y de que los partidos tradicionales en el poder no han gobernado en función de los intereses populares, las masas rechazan la lucha armada (CEDOH), Boletín Informativo, No. 109, mayo 1990, p.12).

Por su parte, Wilfredo Gallardo, miembro de la Dirección Nacional Unitaria (DNU), asegura que en estos momentos darán prioridad a la lucha política legal al interior del país. La DNU aglutina a cuatro grupos político-militares: el Partido Comunista, el Movimiento de Unidad Popular Revolucionaria (MUPR), el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC-C) y el Movimiento Popular de Liberación Cinchoneros (MPL). El Frente Morazanista renunció a la lucha armada. El objetivo es "abrir" el espacio político para combatir las restricciones políticas, ideológicas, de organización y movilización, a fin de participar y ser

alternativa en las elecciones de 1994". Aunque piensa que la vía armada sigue vigente, no obstante, ésta depende de como se desarrolle la lucha política en el país.

Según Wilfredo Gallardo hay sectores en el ejército, de la iglesia y de la burguesía nacional que desearían una solución más justa y con justicia social. El Frente Morazanista se uniría a estas fuerzas para formar un "Frente Nacional de Salvación". La propuesta de este grupo de la DNU se basaría en a) reestructuración de la Comisión Nacional de Reconciliación b) modificación de algunas normas jurídicas para que haya un verdadero pluralismo político e ideológico c) salida de las tropas norteamericanas y d) luchas por una democracia participativa.

En el mes de agosto la Dirección Nacional Unitaria (DNU) dio a conocer un documento de trabajo titulado "Por la democracia, la justicia social y la soberanía nacional", donde exponen su pensamiento político en este momento de la coyuntura nacional y regional.

Comienzan constatando lo que se vive a nivel mundial, momento de transformaciones sociales y políticas, de revolución científico-técnica, el desplome del mundo socialista y un Tercer Mundo débil y sin perspectivas. Es un momento en el cual se da una ofensiva del imperialismo tratando de revertir los procesos de liberación nacional mediante procesos políticos rechazantes y modelos económicos neoliberales. Pero, a pesar de todo, "no existe otra alternativa social al régimen capitalista que no sea el socialismo".

Ante este momento de crisis generalizada las masas se orientan hacia salidas más limitadas, pero "viables y posibles". Lo posible resulta ser ahora la lucha por una "democracia participativa y avanzada" que implica la elegibilidad de las autoridades nacionales y locales, en el marco de la pluralidad política e ideológica, con la participación activa de las masas, el uso de mecanismos de control y la ampliación y defensa de sus derechos sociales.

Para que esto sea posible se hace necesario conseguir el consenso de las mayorías, aunque éstas se movilicen únicamente por objetivos inmediatos y se muestren reacias a dar apoyo a proyectos políticos poco viables. Esto significa constatar que en el momento presente "los ritmos y los plazos de las revoluciones populares se han tornado más lentos o se alargan".

Lo que corresponde ahora es luchar por una "democracia participativa y avanzada, por la justicia social, por una reestructuración de nuestra economía que responda a los intereses del pueblo, por el rescate de la soberanía y la

identidad nacionales y por hacer prevalecer la Constitución sobre la arbitrariedad". Esto no significa invalidar los procesos revolucionarios impulsados por los pueblos cuando se dan las condiciones y cuentan con una vanguardia política que asume el liderazgo.

Reconociendo el aislamiento en el cual se encuentran trabajando para redimensionar las fuerzas sociales favorables al cambio, hacer política aquí y ahora, para cambios concretos y objetivos inmediatos. El hecho de que se "alarguen los procesos de la revolución" no significa renunciar a la defensa de los intereses inmediatos de nuestro pueblo, lograrle beneficios, reducirle sufrimientos, enseñarle a luchar sin perder la perspectiva revolucionaria en el marco de la sociedad civil y del Estado actual.

Finalmente, poco antes de acabar el año, la DNU planteaba las condiciones bajo las cuales está dispuesta a negociar con el presidente Callejas y el general Luis Alonso Discua Elvir. Estas condiciones son:

1. Que el Congreso Nacional emita un amnistía amplia e incondicional a favor de todos los presos políticos.
2. Que el Congreso Nacional anule la Ley Antiterrorista.
3. El retiro de las tropas norteamericanas del territorio de Honduras.
4. Que se publique el informe sobre los desaparecidos
5. Que se castigue a los responsables de los desaparecidos
6. Que se reactive la Comisión Nacional de Reconciliación.

En caso de aceptarse estas condiciones como requisito para la negociación, y teniendo como aval a los organismos internacionales autorizados, se comprometerían a establecer contactos con los dirigentes de los otros grupos de izquierda diseminados por Holanda, Dinamarca, España, Suiza y México.

3.3. Momento, tareas y alternativas del movimiento popular

Anteriormente se señalaba que el éxito del proyecto económico-político de Callejas se debía, en parte, a la debilidad propiamente dicha del movimiento popular. Es ahora cuando se analizará más de cerca esta realidad.

Partimos de la constatación, en los sectores de izquierda, de no haber podido lograr una oposición de carácter nacional. De una manera u otra el movimiento popular ha reproducido el esquema dominante de los sectores políticos

oficiales: unos pocos definen las líneas, muy pocas veces se escuchan las demandas reales de los afiliados y cuando se da un acercamiento a las bases es únicamente para buscar respaldo a determinadas líneas políticas definidas de antemano por cúpulas ilustradas, pero desconectadas de los procesos reales de los sectores populares.

La dinámica de los sectores de izquierda se ha definido por una relación vertical muy desencarnada de las necesidades reales de la población. Además las organizaciones sociales populares no son más que una extensión sindical, magisterial, estudiantil... de un determinado movimiento político. Y cuando en la organización popular concluyen varias corrientes políticas, normalmente acaban destruyéndola porque cada corriente asegura tener la "línea correcta" para conducir dicha organización. El movimiento político, por su parte, se considera dueño de la organización y responde a ella de acuerdo al esquema vertical de los dominadores. En consecuencia, la organización social popular históricamente no ha sido más que una correa de transmisión de los movimientos políticos, sin poder conseguir su dinámica de autonomía y representar los intereses reales de aquellos a quienes debía representar.

Si el sistema político popular no ha sido, ni lo es en la actualidad, una instancia de verdadera representación popular y, debido a su subordinación a la instancia política, tampoco ha sido expresión de los intereses populares, entonces se entiende perfectamente la ausencia de un proyecto (popular) nacional.

Este modelo de subordinación de lo social (popular) a lo político ha producido un distanciamiento real respecto de la mayoría de los hondureños no organizados. Explica igualmente la atomización de los proyectos populares. Se acaba defendiendo los intereses de sus afiliados como si fueran de todos los hondureños. Las luchas sindicales por aumentos salariales olvidan que el 80% de la población no está organizada y a lo único que puede aspirar es a sobrevivir. Esto imposibilita la creación de una alternativa real en el país. Lo mismo sucede con los campesinos organizados o las organizaciones de masas. Por lo tanto, se impone rescatar su función social para las organizaciones populares de representar, luchar por las demandas y derechos del sector popular. Tiene que darse igualmente una transparencia respecto a los acuerdos y alianzas con las organizaciones políticas. Lo que se está diciendo con otras palabras es la necesidad de terminar con el modelo vertical de subordinación de las

organizaciones al movimiento político.

Si se quisieran enumerar las tareas más importantes señaladas por el movimiento popular serían las siguientes:

1. Como tarea prioritaria está el incorporar a los "sectores no organizados" al "movimiento popular organizado", tanto del campo (campesinos) como de la ciudad (pobladores de los barrios marginales). Esta tarea se ve como muy importante en el proyecto de unidad y revitalización del movimiento popular.
2. La búsqueda de criterios de relación entre las organizaciones populares y las organizaciones políticas, salvando la autonomía e independencia, pero manteniendo una alimentación mutua.
3. La elaboración de una política de alianzas que tenga como objetivo la elaboración de un proyecto popular nacional.
4. Realizar un proyecto de vinculación con los sectores de campesinos independientes y de pobladores.
5. Alianzas entre los diversos sectores sociales populares y de éstos con otros sectores sociales, políticos y económicos del país.
6. El proyecto de incorporación de los sectores no-organizados debe partir, no de los centros urbanos, sino de la conformación y consolidación de las estructuras populares regionales.
7. Concreción de las políticas agrarias a exigir y por las cuales luchar.
8. Elaboración de un programa reivindicativo para enfrentar la inflación, aumento de los precios, salario y empleo de los trabajadores.

Por último, pasando a las alternativas posibles que hagan frente al proyecto político-económico neoliberal de Callejas el movimiento popular lo visualiza mediante la creación de un nuevo partido político pragmático, con un programa de gobierno realizable, viable, libre de utopías. Esta propuesta de final de año está respaldada por la APU, CNTC, PCH, OCH y algunos intelectuales.

Tratan de llegar a una "concertación" entre las organizaciones afines y formar tres fuentes: a) uno que comprenda a las organizaciones sindicales del campo y la ciudad. b) a los patronatos de todo el país. c) a los pequeños y medianos empresarios. La instancia sería la Plataforma de Lucha.

El Frente Sindical estaría integrado por todas las federaciones obreras y campesinas. Se piensa en la CTH y se quiere una poderosa

y única organización obrero-campesina, que sea pluralista desde el punto de vista ideológico e independiente de la manipulación partidaria. La lucha sindical debe ser independiente de la lucha partidaria.

El Frente formado por todos los patronatos pretende aglutinar a todos los patronatos de pobladores de todo el país. Desempeñarían un papel fundamental en el corto y mediano plazo dado que la concentración poblacional se está dando en los centros urbanos.

El nuevo partido político estaría basado en una declaración de principios socialistas, democrática, nacionalista e independiente de cualquier proyecto foráneo. Se debe formular el programa de gobierno operativo y pragmático, teniendo en cuenta la realidad nacional e internacional.

Dado que los partidos tradicionales cuentan cada uno con 34% de los votos (entre los dos suman un 68%) hay que luchar por un 32% de los votantes no comprometidos o que lo hacen indistintamente por uno u otro. La política es ganar ese 32%. De lo que se trata es quitarle una cuota de poder al adversario en favor de un pueblo que se muere de hambre. No buscar la conciliación entre los sectores de izquierda es una irresponsabilidad y ayudaría al triunfo del proyecto gubernamental).

El gran interrogante que queda planteado es saber si el movimiento popular será capaz de superar las crisis internas de liderazgo, divisionismo y luchas de poder.

IV. IGLESIA

Tratando de recoger en este apartado lo que ha sido la presencia de la Iglesia en el escenario nacional a lo largo del año podemos comenzar señalando dos características. Primeramente, se ha constatado una mayor incidencia de la Iglesia en la realidad social del país, destacando sobre todo su pronunciamiento ante el gobierno por las medidas económicas. En segundo lugar que la Iglesia Católica ya no ocupa todo el espacio religioso y hay otras iglesias junto a ella. Si esto era cierto desde hace tiempo, no lo era tanto su irrupción en la opinión pública. Han sido las "Iglesias históricas" (luterana, episcopaliana, menonita...) y, como contraparte, siguen estando presentes las "sectas".

Ya desde el primer mes los obispos denunciaban al Banco Mundial la presión ejercida sobre los diferentes países debido a que otorga préstamos a cambio de la implementación de la planificación familiar. Y con motivo de la toma

de posesión de Callejas pedía que su gobierno fuera "un proyecto histórico-político que ataque las causas profundas de la problemática nacional sin claudicar ante los intereses extraños con respecto a la Constitución y los tres poderes del Estado". También señalaban la necesidad de reactivar la Comisión Nacional de Reconciliación debido a que continúan las violaciones a los derechos humanos y están sumamente preocupados por los despidos de los empleados públicos.

Anteriormente los conflictos que se daban eran entre el gobierno y un sector de la iglesia. En cierto momento se filtró la noticia de la existencia de un acuerdo entre la cúpula eclesial y la político-militar de tal forma que si surgiera algún problema se arreglaban directamente; de esta manera, se mantenía el orden y se evitaba una publicidad inconveniente y perjudicial para ambas instancias. Con motivo de la expulsión del P. Reymann, monseñor Luis Alfonso Santos denunció ante la opinión pública que normalmente los militares no cumplían dicho acuerdo y actuaban unilateralmente a veces con la expulsión del país o con medida similares. Lo que esta situación ponía de manifiesto es que estos sectores de la iglesia quedaban doblemente deslegitimados, dado que el silencio eclesial resultaba cómplice de la situación creada.

Lo novedoso de este año ha sido el hecho de pronunciarse la Conferencia Episcopal respecto a las medidas económicas del gobierno, que sin lugar a dudas fue el acontecimiento político más importante del año pues la vida nacional giró en torno a ello. Con esta actuación era toda la Iglesia la que quedaba confrontada con el gobierno y no un sector minoritario. Es importante; por cuanto manifiesta, de un lado, una mayor eclesialidad y, de otro, la Iglesia recupera una libertad que antes no tenía pues puede decir una "palabra de iglesia" acerca de la realidad social.

El documento episcopal llevaba por título "Reflexiones sobre la actual situación económica" y allí se responde a la propuesta gubernamental y se toma posición desde la "opción por los pobres", en concordancia con la iglesia latinoamericana en los últimos años. En dicho documento se hace un cuestionamiento ético al proyecto económico neoliberal iniciado por Callejas. Expresándolo en proposiciones sencillas la denuncia la resumiríamos de la siguiente manera:

1. Es una injusticia que el sacrificio recaiga sobre las clases media y pobre, en vez de

hacerlo sobre la clase alta y los empresarios: "¿No sería más bien de esperar que dichas medidas ayudaran a levantar al pobre de tanta postración?"

2. Los efectos de la crisis golpean fundamentalmente a los pobres: subida de los artículos básicos, transporte, medicinas...

3. El manejo político de la crisis e hace aumentando el desempleo y dividiendo a las organizaciones populares.

4. Las medidas económicas obedecen a presiones foráneas (organismos financieros), las cuales son inhumanas por no tener como centro a las clases pobres y sus necesidades urgentes.

5. El pueblo pobre tiene que soportar ahora una crisis causada fundamentalmente por las clases pudientes y adineradas del país.

6. Piden que se busque una alternativa más equitativa, es decir, que no golpee a los pobres.

7. No legitiman la violencia como camino para mantener la paz y la tranquilidad social.

8. Las medidas en vez de favorecer la "concertación nacional" agudizan las contradicciones sociales.

9. Desenmascaran el discurso de todos aquellos que identifican ideológicamente "oposición democrática a las medidas" con subversión y comunismo.

La acogida del pronunciamiento de la CEH fue muy positiva, confirmándose una vez más el peso y la autoridad moral de la iglesia cuando se pronuncia sobre determinados acontecimientos. En cambio, el gobierno callejista reaccionó de manera distinta pues trataba de neutralizar lo dicho por los obispos mediante una invitación al diálogo, argumentando que no hablan comprendido el alcance y sentido de las medidas económicas. Sabido es que una de las preocupaciones de Callejas ha sido la de controlar la imagen que se proyecta en los medios de comunicación y acabar con todo tipo de oposición a su proyecto político-económico. Con el movimiento popular tuvo éxito en el sentido de neutralizarlo por medio de una conversación estériles y sin sentido acerca de la "concertación nacional"; consiguió, además, paralizar y mediatizar la protesta y movilización popular.

Pero, con la iglesia no obtuvo los mismos resultados y el "diálogo-confrontación" con monseñor Luis Alonso Santos se mantuvo constante y lo mismo ocurrió con monseñor Mauro Muldoon. El primero denunció insistentemente que los ladrones de la CONADI se encuentran en casa presidencial, recibiendo como respuesta el

"estar actuando políticamente". El obispo olan-chano contradujo públicamente a las FFAA negando la existencia de la subversión en el país, lo cual se utiliza para mantener el ejército tal cual o para buscar el apoyo económico de EEUU.

Otra novedad importante de cara a la sociedad lo constituye el protagonismo creciente de las "iglesias locales". Hasta hace poco y como reflejo de una sociedad estrictamente jerarquizada que cree únicamente en las cúpulas y en el poder, sólo figuraba como relevante y abarcando todo el espacio religioso lo que emanaba de la jerarquía; se identificaba a la iglesia con la jerarquía. Pero poco a poco van irrumpiendo las iglesias locales, movimientos eclesiales y las comunidades mismas como actores y lugares donde la iglesia es más viva.

Expresión de ello han sido los diferentes pronunciamientos de los Socorros Jurídicos (de Colón y Yoro), la denuncia de los sacerdotes de La Paz e Intibucá sobre la realidad en dichos departamentos, amenaza a varios sacerdotes, atentados contra una emisora católica y el P. Felipe Quintanilla, intimidación por el trabajo con derechos humanos, allanamiento de las oficinas de Caritas Arquidiocesana, persecuciones diversas y anónimas. Es signo de una iglesia cercana a las mayorías pobres del Pueblo de Dios que busca acercar la fe cristiana a los urgentes problemas cotidianos y transformar evangélicamente esta sociedad para que se adecue al Proyecto del Padre.

Digno de mencionarse juntamente con lo anterior es que el "sector conflictivo" de la iglesia ha sido una parte del clero nacional. Con esto se rompe con una dicotomía, explotada hábilmente desde el punto de vista político, que identificaba al clero extranjero como subversivo del orden establecido y al clero nacional como mantenedor del mismo. Si a esto unimos lo dicho respecto a la jerarquía vamos constatando el desarrollo de una iglesia más en la línea de Medellín y Puebla e independiente del proyecto político-económico de los sectores dominantes de la sociedad.

La presencia de las sectas constituye una amenaza latente dado que desde la conquista ha ejercido la hegemonía en el campo religioso: debe acostumbrarse a una nueva realidad de pluralismo religioso y aceptar la pérdida del monopolio eclesial en el país. Esto no se hace sin conflictos y tensiones y obligando a redefinir el contenido de la evangelización en la situación presente. Por lo tanto no es de extrañar la polémica desatada con motivo de la petición de permiso y autorización al presidente Callejas por

parte del matrimonio Hunter para iniciar una campaña de evangelización. Igualmente, con ocasión de la presencia del televangelista Pat Robertson, el secretario de la Conferencia Episcopal, P. Dionisio Patvin, decía que "los predicadores fundamentalistas solo orientan sus palabras al aspecto espiritual y no toman en cuenta la problemática social. El hombre está compuesto no sólo de alma, que es la parte más importante, sino también del cuerpo. Entonces ante las injusticias sociales la iglesia tiene que hablar y esto no es comunismo, es doctrina social de la iglesia que viene directamente del Evangelio". Al mismo tiempo criticó la evangelización muy sentimentalista que se utiliza y la conversión del Evangelio en un show con enormes campañas publicitarias. Se refirió también al negocio que se explota tras estas campañas de evangelización. En la misma dirección se orienta el coordinador de la Santa Misión en la diócesis de San Pedro Sula cuando expresaba que con la Santa Misión se persigue transformar la sociedad desde la fe: "antes las campañas de evangelización estaban apoyadas en lo doctrinal, pero hoy debemos realizar una evangelización liberada que transforme la sociedad y que haga a cada ser humano autor de su propia liberación y madurez espiritual.

A este tipo de iglesias se le acusa normalmente de vehicular una religiosidad tipo "opio del pueblo" por los rangos alienantes que conlleva, pero con ello no se da cuenta de toda la complejidad que encierra. Más bien podría llamarsele como de "religión funcional al sistema" que es más neutro y deja entrever igualmente su complejidad.

Las "Iglesias históricas" (Luterana, Episcopaliana, Menonita...) se sitúan en una línea liberadora con dinámicas no muy alejadas a las de la Iglesia Católica y su presencia ha sido en una doble dimensión. Por un lado, testimoniar la unidad de las diversas iglesias por medio de diferentes actos ecuménicos. Por otro lado, un cuestionamiento ético a las medidas económicas del gobierno callejista. Fue pronunciarse contra el "paquetazo", abogar por un diálogo profundo con todos los sectores de la sociedad y la realización de una auténtica "concertación nacional". En repetidas ocasiones instaron a Callejas para que modificara las medidas por estar llevando a mayor miseria a los pobres.

No queremos concluir sin dejar de mencionar la presencia del Premio Nóbel arzobispo Desmond Tutu en su corta estancia. Con mucha claridad cuestionó el fundamento ético de la decisión de las Naciones Unidas para aprobar una solución de fuerza en el conflicto del Golfo

Pérsico. Si fue interesante por ser un tema que no han tocado las diferentes iglesias en el país las declaraciones del Obispo de la Iglesia Episcopal de Panamá, J. Ottley. Decía que no se justificaba la presencia de las tropas de EEUU en el país y que la ocupación militar es mala e injusta, no pudiéndose utilizar ni en Panamá ni en Honduras. También se pronunció a favor de la reducción de los ejércitos nacionales porque absorben gran cantidad de recursos.

Con esto quedan señalados algunos de los hechos más relevantes del año y el gran interrogante de saber si en el futuro la Iglesia Católica continuará firme en su fidelidad a lo más genuino de la Iglesia Latinoamericana de cara a los retos de la sociedad y a la reunión de Santo Domingo. Con las Iglesias históricas puede iniciarse un encuentro ecuménico importante donde ambas saldrían fortalecidas. Y con las sectas, el reto no es tanto verbal cuanto el de tomar evangélicamente en serio un acompañamiento en profundidad de las mayorías desposeídas del país.

V. La región

La región comparte el mismo diagnóstico que el resto del continente: "la década de los ochenta fue una década perdida". Y la situación llegó a unos viles de retroceso anteriores a los años setenta. Por eso la CEPAL propone la necesidad de "que el crecimiento económico vaya acompañado de la equidad de los beneficios". Para Centroamérica, la crisis presente ha significado un descenso del 17% en los ingresos por habitante. Con la caída de los precios de café en el último año se perdieron 600 millones de dólares y se calcula que hasta fines de siglo podrán alcanzarse los niveles perdidos. A lo anterior hay que unir el hecho de haber sido imposible detener el flujo de capital latinoamericano hacia el exterior que ha ocasionado falta de capital y freno al desarrollo económico. Entre 1973 y 1987 la fuga de capital fue de \$ 151,000 millones (=43% de la deuda en ese período). Pero además se fueron hacia el "centro" en servicio de la deuda \$ 250,000 millones en los últimos siete años. Obviamente el reverso de esta situación lo constituyen la disminución de los gastos públicos y una reducción de los salarios reales.

Durante la década del 80 la economía centroamericana retrocedió y el producto real por habitante de la región de fines de los 80 es similar al de quince años atrás. El comercio centroamericano se redujo a la mitad y la deuda

externa regional pasó de 9,843 millones de dólares en 1981 a más de 20,000 millones en 1989. La deuda por habitante (a nivel regional) es de 800 dólares, incluyendo a los niños. La población de refugiados, repatriados y desplazados de guerra son más de dos millones de personas, casi el 9% de la población en toda la región. La reducción del gasto público en salud, educación y servicios de vida. La pobreza generalizada empeoró. En 1980 se calculaba que había 13 millones de centroamericanos (un 60% aproximadamente) en situación de pobreza, es decir, cuyos ingresos eran insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y 8.5 millones en situación de "extrema pobreza". En 1985 la población debajo del nivel de pobreza abarcaba a un 65% de los centroamericanos y 10 en situación de "extrema pobreza"(8).

5.1. Los hechos

El año comenzaba con una Panamá invadida y la pregunta sobre su significado y alcance. Tras varios intentos económicos y políticos por expulsar a Noriega del poder, EEUU vuelve a la "política del garrote" puesto que lo que está en juego son los intereses norteamericanos. Es decir, lo que se esconde detrás de Noriega es el canal de Panamá y las bases militares. La presencia militar estadounidense debe continuar en la región a pesar de que en los tratados debería terminar en 1999. Con Endara en el poder se puede negociar la presencia militar, cosa que era imposible con Noriega: en esta situación si pueden negociarse las bases militares. A esas razones habría que añadir los intereses económicos representados por el Centro Financiero Internacional de Panamá y, algo no menos importante, el haber suprimido la creciente influencia financiera de Japón, así como su deseo de abrir una nueva vía interoceánica.

Pero juntamente con la invasión, a EEUU le tocó enfrentar una doble tarea: por un lado, ver la manera de que los gobiernos latinoamericanos reconocieran el gobierno de Endara y, por otro lado, convencer a los mismos gobiernos que no se emplearía en lo sucesivo la "política del gran garrote" para ejercer su dominación en el continente. Para Latinoamericana era evidente que se había violado el derecho internacional y debido al problema del narcotráfico y la guerra en algunos países, esta situación podría utilizarse como justificación para otra intervención militar. Especialmente delicada es la situación de Nicaragua, máxime cuando en ese momento era un interrogante el resultado de las elecciones de febrero. Por lo tanto, reconocer el

gobierno de Endara era sinónimo de legitimar la invasión y dejar abierta la puerta para futuras intervenciones.

De todas maneras, una de las cosas que iban quedando claras es que el tema del narcotráfico va a ser un elemento con amplia cobertura para la intervención de EEUU en cualquier país. Esto se da precisamente en un contexto internacional de distensión donde al retroceder la Unión Soviética, EEUU aumenta los espacios de poder. Los procesos revolucionarios quedan solos y desprotegidos ante un enemigo crecido y fortalecido.

El tema del narcotráfico tiene su importancia, dado que, según EEUU, las drogas son su mayor amenaza. Políticamente se sustituye la "guerra fría" por la "guerra contra el narcotráfico". Antes se utilizaba ideológicamente el expansionismo soviético y ahora le reemplaza el "expansionismo del narcotráfico".

La derrota del Frente Sandinista en las elecciones de febrero significó la victoria del proyecto de EEUU sobre la revolución nicaragüense. Pero los antecedentes del triunfo de la UNO hay que rastrearlos hasta agosto de 1987. "El FSLN tuvo que posponer las metas revolucionarias y frenar el desarrollo de su programa histórico. El gobierno sandinista, al acatar las exigencias del plan de paz, le otorgó a la oposición el espacio político para su actuación, lo que por otra parte facilitó a los EEUU el escenario para obtener el triunfo sobre el régimen revolucionario, a través de la creación de la UNO"(9). Al mismo tiempo, los movimientos de liberación tendrán que entrar en proceso de negociación, los sectores progresistas se debilitan y resultará sumamente difícil el triunfo de otra revolución en Centroamérica.

La interpretación de la derrota sandinista no fue unánime. Mientras que para unos significaba el rechazo a las dictaduras y confirma la primacía de los procesos electorales sobre la lucha armada como camino para tomar el poder; para otros, no es más que el resultado del bloqueo económico, político y militar efectuado sobre el régimen sandinista. El "Plan de Paz" sirvió fundamentalmente para obtener concesiones de Nicaragua y aunque neutralizó las amenazas de guerra no las hizo desaparecer; eso obligó a Nicaragua a seguir manteniendo una economía de guerra desviando, de esta manera, los recursos que hubieran sido utilizados en desarrollo social. Esta política se llevó hasta el final y por ello se retrasó la desmovilización de la contra por parte de EEUU y Honduras hasta la entrega del poder en manos de Violeta Chamorro.

Con la derrota sandinista el epicentro del conflicto centroamericano se trasladó a El Salvador, centrándose fundamentalmente en el diálogo gobierno-guerrilla. En esta situación los gobiernos y ejércitos se sienten con mayor capacidad de presión y a la guerrilla no le queda más remedio que incrementar sus acciones para ser escuchada en las conversaciones. Y aunque los problemas que siguen pendientes son el desarme, la reducción de los ejércitos y el diálogo, todo parece indicar que la nueva agenda centroamericana pasa del escenario político al económico.

Los presidentes organizaron a mediados del año una "cumbre económica" en Antigua y firmaron dos documentos, la "Declaración de Antigua" y el "Plan Económico de Centroamérica" (=PAECA). En el nuevo contexto regional de "alineamiento conservador" se abren nuevos espacios para la reactivación del proceso de integración económica y la economía regional. Lo que se busca es la apertura de la economía al exterior y la modernización del aparato productivo. En el PAECA se configura posiblemente el futuro de la región aunque está supeditado a la ayuda internacional para que tengan éxito. Esto pone de manifiesto que la nueva estrategia de la administración estadounidense se va explicitando: ahora todo se centra en el desarme y el diálogo, se apoya el desarrollo económico para dejar a un lado la cuestión militar. Si se busca la estabilidad política, la reactivación económica y la integración regional, es con la única finalidad de consolidar una democracia donde ya no tengan cabida nuevas revoluciones.

Pero no basta con firmas de acuerdos acerca de la reactivación económica. Una primera dificultad ya señalada es como obtener los recursos financieros de la ayuda internacional. La segunda es la "voluntad política" de los presidentes centroamericanos y, una tercera, es como hacer compatible el proyecto integracionista con los "Programas de Ajuste Estructural". Estos últimos se han ido implementando por presión del FMI y BM, dado que son los únicos organismos que ofrecen recursos. Los programas de Ajuste Estructural vuelven a condenar a los países periféricos para que se especialicen en la producción agrícola. Esto significa que se niega el desarrollo industrial para todos estos países; se relega, pues, el proceso integracionista que plantea como uno de sus objetivos más importantes el desarrollo industrial.

El cambio de una agenda política por otra económica no hace olvidar los problemas pendientes en el ámbito político, sobre todo el

desarme. Y, sin embargo, a la hora de la verdad los ejércitos quieren conservar su poder político y militar argumentando, bien sea la existencia de organizaciones guerrilleras, la situación de los países vecinos, problemas limítrofes o ... no importa qué razones. Lo único cierto es la reducción del ejército nicaragüense mientras que los restantes tienen poderosas razones para no hacerlo. Así, por ejemplo, Honduras afirma que su ejército es el menor de todos y defiende la presencia militar estadounidense como una compensación a su bajo poder militar. En definitiva, como la negativa para reducir los ejércitos es unánime buscan legitimarse reorientando sus funciones hacia acciones de desarrollo social, desarrollo comunitario, tareas ecológicas o el combate del narcotráfico.

Con estos antecedentes se entiende perfectamente bien que las conversaciones de la Comisión de Seguridad no avanzaran mucho y sólo se definieran funciones y objetivos generales. Entre éstos últimos se señalan dos fundamentales: a) asegurar que los ejércitos centroamericanos eliminen sus características ofensivas y se orienten básicamente hacia los conflictos de orden interno y la defensa de la soberanía b) que los ejércitos guarden un equilibrio proporcional con sus vecinos en lo referente al número de efectivos y armamento(10).

Todo ello lleva a concluir que, aunque las condiciones para el desarme existen, no es el momento para hacerlo. Podemos finalizar dando una razón más de peso ante esta resistencia al desarme: "de cara a la negativa de los ejércitos centroamericanos está el problema de la implementación de los "Programas de Ajuste Estructural" que proclama como uno de los objetivos fundamentales la reducción del gasto

público; pero, a su vez, su implementación requiere de una estructura militar "eficiente" para hacer frente a las posibles protestas populares que puedan generar las medidas económicas monetarias. El dilema se plantea entre reducción del gasto y, consecuentemente, del presupuesto militar, con la necesidad de mantener un Estado de Seguridad Nacional"(11).

NOTAS

- (1) INFORPRESS CENTROAMERICANA, No. 912, 15/XI/90, Informe Especial
- (2) "Honduras: el PAE, ¿estrategia de desarrollo?. INFORPRESS CENTROAMERICANA, No. 912, 15/XI/90
- (3) Recojo los lineamientos más importantes de Hugo Noé Pino en "El Ajuste Estructural en Honduras". CEDOH. Especial No. 45
- (4) INSEH Informa. No. 59, julio 1990, p.7
- (5) CEDOH. Boletín Informativo, No. 112, agosto 1990, p.16
- (6) INSEH Informa. No. 60, agosto-septiembre 1990, p.2
- (7) CEDOH. Boletín Informativo, No. 112, agosto 1990, p. 7
- (8) Estos datos aparecen en "De una década a otra: Centroamerica de cara a los 90s", de Carlos M. Vilas. Polémica, No. 12. Segunda Epoca, septiembre-diciembre 1990
- (9) INFORPRESS CENTROAMERICANA, No. 876, 1/III/90, p.2
- (10) INFORPRESS CENTROAMERICANA, No. 912, 15/XI/90, p.6
- (11) INFORPRESS CENTROAMERICANA, No. 898, 9/VIII/90, p. 3



**Centro de documentación
de honduras**

Apartado Postal 1882
Tegucigalpa, Honduras
Centro América

VIA AIR MAIL
CORREO AEREO
PAR AVION